

CÉSAR DOCAMPO

# Filipinas, un Estado acosado

*La inclusión de Filipinas en la lista de objetivos de la guerra contra el terrorismo de EEUU, le ha convertido, en febrero de 2002, en el destino de las tropas estadounidenses, lo que ha despertado antiguos fantasmas políticos. Las guerrillas insurgentes, comunistas o musulmanas, la práctica frenética del negocio del secuestro, la degradación medioambiental y la inestabilidad política constituyen los problemas a los que el Gobierno de Gloria Arroyo deberá hacer frente. Unos desafíos de vieja raigambre, algunos de los cuales han adquirido una dimensión cualitativamente diferente al agudizarse y agravarse en el tiempo.*

Son muchas las causas que explican parte de estas situaciones críticas, pero es posible identificar en el carácter invertebrado del Estado filipino la última *ratio* de sus problemas fundamentales. La ruptura de su Estado colonial, más que fruto de la lucha de burguesías nacionales y clases medias, fue una cómoda concesión del Gobierno estadounidense en 1946, cuando ese tipo de posesiones coloniales era totalmente anacrónica. Desde entonces, la vida política filipina está signada por la ausencia de un sector social que piense en el país como un proyecto nacional. Por el contrario, el sistema político se estructuró a partir de grupos locales que negociaban con el poder central un *status quo* acomodaticio (al igual que lo hacían en la época colonial) y que resultó poco propenso al desarrollo de proyectos de perfil nacional. El abigarrado archipiélago, conformado por más de 7000 islas, parece reforzar ese destino de disolución y de débil unidad política. Tal situación se refleja en el carácter escasamente estructurado de los partidos, que no son más que lábiles configuraciones de patronazgos locales nada propensos a la lealtad partidaria y más bien dispuestos a traficar su apoyo al mejor postor.

La ausencia de una verdadera revolución nacional anticolonialista se expresó a nivel económico en el escaso desarrollo del mercado interno. La ausencia de sectores medios de magnitud ha provocado un crecimiento económico de características desiguales desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, y desequilibrado en términos geográficos, quedando vastas zonas del país huérfanas de la presencia de autoridades nacionales con suficiente poder de mando. Estos dos problemas los heredó la nueva democracia después del derrumbe del régimen de

César Docampo es politólogo y analista en temas de seguridad y conflictos regionales.  
cesardoc@yahoo.com.ar

Ferdinando Marcos en 1986, pero poco se ha hecho para resolverlos. El débil crecimiento económico de las dos últimas décadas —comparado con Indonesia o Malasia, sin mencionar Corea—, ha agravado esos viejos síntomas de la “enfermedad” nacional filipina.

Durante la nueva fase democrática, dos presidencias han terminado su mandato completo: Corazon Aquino (1986-1992) y Fidel Ramos (1992-1998) El tercer Gobierno, el de Joseph Estrada (1998-2001), finalizó abruptamente al segundo año por corrupción. Estrada, curiosa mezcla de populismo retórico y ortodoxia neoliberal, fue demasiado corrosivo para los sectores privilegiados, temerosos de su influencia sobre los sectores populares y poco propensos a soportar un estilo excesivamente plebeyo. Reemplazado por su vicepresidente Gloria Arroyo —poseedora de un perfil “adecuado” para el gusto del *establishment*—, y después de un año en el poder, altas expectativas se ciernen sobre la que algunos denominan —quizás en una velada expresión de deseos— la “dama de hierro del sudeste asiático”.

Con variantes, todas las gestiones gubernamentales se han ocupado de armonizar con el espíritu de la época, léase ortodoxia económica y alineamiento con Occidente. Aquino inició el trabajo con fuertes políticas de reducción arancelaria, mientras que Ramos redondeaba la tarea con profundas medidas de liberalización financiera, de inversiones y comercial. El “buen clima de negocios”, al igual que otros países ocupados en ser buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, fue acompañado por un proceso de endeudamiento externo con un alto contenido especulativo. Hoy, con una deuda externa superior a 52 mil millones de dólares, gran parte del presupuesto nacional filipino se dedica al pago de los intereses de la misma. Los buenos números derivados de la ortodoxia —baja en el déficit fiscal, estabilidad del tipo de cambio— no logran ocultar esta amenaza que pesa sobre todo el sistema y que las aseguradoras de riesgo no olvidan a la hora de hacer sus calificaciones.

Pero mas allá de las variables clásicas, el Gobierno de Gloria Arroyo se enfrenta a tres problemas fundamentales que superan la gestión económica tradicional y suponen modificaciones políticas que afectan a aspectos sustanciales de la vida nacional. El primer gran desafío es enfrentar el principal déficit de la realidad económico-social filipina: la pobreza. El aumento de la desigual distribución del ingreso pone un claro mentís a las visiones más optimistas sobre las tendencias del crecimiento. En segundo lugar, cada vez resulta más imperioso enfrentar los profundos problemas medioambientales —que ya afectan directamente a las variables clásicas de la economía— que, en un país con una tasa de natalidad de 2,4% —el doble del promedio de la región— están convirtiendo vastos sectores del país en páramos de desolación y miseria crónica. Por último, el desafío más urgente y decisivo de Filipinas es contrarrestar la situación de inseguridad creciente que está afectando severamente a los negocios del país. No sólo dar solución política a los conflictos desarrollados por las guerrillas comunistas y musulmanas, sino también reconfigurar un sistema de seguridad —Fuerzas Armadas más Policía Nacional— altamente corrupto y desestructurado, incapaz de articular una cadena de mandos y de recibir una dirección estratégica adecuada.

## Pobreza y degradación medioambiental

Más de un tercio de los 75 millones de filipinos existentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En sectores del sur del país —Mindanao, Tawi Tawi, archipiélago Sulu— este índice alcanza el 60%. Quizá el mayor déficit de la democracia filipina resida en su incapacidad para derivar parte del ingreso nacional hacia los sectores más desfavorecidos. La situación se agrava a medida que la población crece a tasas muy elevadas.

La mala distribución de la tierra es el factor principal que subyace bajo la desigualdad social —Filipinas es el país con mayor desigualdad de Asia—. Durante el siglo XX, casi todos los Gobiernos —incluido el periodo colonial estadounidense— han dictado normas y leyes para enfrentar la cuestión agraria,<sup>1</sup> pero los sectores privilegiados han resistido con éxito —en ocasiones recurriendo a milicias privadas— cualquier cambio sustancial. Las miles de páginas de códigos y leyes se han transformado en documentos de escasa significación real.

La presión demográfica, junto a la extremadamente desigual distribución de la tierra, han provocado sistemáticas invasiones de tierras vírgenes en las zonas montañosas, lugar donde históricamente se han establecido poblaciones indígenas con prácticas agrícolas comunitarias. Estos grupos se han visto severamente perturbados por la presencia de campesinos sin tierras provenientes de las zonas bajas, con sus prácticas agrícolas predatorias, y por las compañías, principalmente extranjeras, que practican la tala sistemática de árboles con poca noción de la sustentabilidad. La profunda deforestación de estas zonas<sup>2</sup> no sólo afecta al ecosistema y la actividad económica que se sustenta en él, sino que influye severamente sobre los estilos de vida aborígenes —unas 10 millones de personas— de carácter ancestral. La pérdida de la riqueza vegetal va acompañada por la destrucción de un rico mundo de valores étnicos peculiares.

Así mismo, la deforestación genera una creciente erosión de los suelos y la destrucción de tierras por anegamiento. Tal situación empeora los índices de productividad agrícola, que se han reducido significativamente en la última década.<sup>3</sup> En los casos más extremos, la sedimentación de los ríos, fruto de la deforestación, está dañando severamente los recursos hidrológicos, agravando el balance energético nacional ya de por sí endeble.

La dimensión de dichos desafíos es apabullante. Desde el comienzo del nuevo periodo democrático, en 1986, la sociedad civil filipina ha iniciado un arduo camino de construcción de organizaciones capaces de dar alguna respuesta a

*La mala  
distribución  
de la tierra  
es el factor  
principal que  
subyace  
bajo la  
desigualdad  
social*

<sup>1</sup> Si algo positivo dejó la ocupación estadounidense en Japón, Corea y Taiwan durante la II Guerra Mundial fue la imposición de la reforma agraria.

<sup>2</sup> La tasa de deforestación en los últimos 60 años ha estado entre las mayores del mundo. En 1934 los bosques cubrían el 57% del territorio; a principios de los años noventa alcanzaba apenas el 20%. Ver Marvic Leonen, "The Philippines: dwindling frontiers and agrarian reform", en Marcus Colchester y Larry Lohman (eds.), *The struggle for land and the fate of the forests*, Zed Books, Londres, 1993.

<sup>3</sup> Norman Myers, *Ultimate security: the environmental basis of the political stability*, W. W. Norton & Co., Nueva York, 1993.

estos problemas, aunque sea de forma parcial y fragmentaria. ONG y organizaciones sociales de todo tipo, al margen de los endeble partidos políticos, han tenido un crecimiento exponencial, conformando actualmente alrededor de 60.000 entidades con un trabajo cada vez más efectivo y concreto. Muchos observadores han puesto su esperanza en ellas, dada la impericia de los Gobiernos o la molice de los partidos. Si bien el entramado de relaciones entre estas organizaciones es intenso, todavía no han logrado alcanzar una “voz nacional” debido a la heterogeneidad de sus orígenes y preocupaciones. Pero a causa de la severidad de muchos de los problemas y de su interrelación, no se descarta que en el futuro estas organizaciones civiles adquieran una perspectiva política nacional y logren terciar efectivamente en la mayoría de las decisiones públicas que afectan a todos los filipinos.<sup>4</sup>

### **Bandas armadas y guerrillas: el Estado en entredicho**

El carácter endeble e invertebrado del Estado filipino se expresa con mayor dramatismo en su incapacidad para ejercer el monopolio legítimo de la violencia. La autoridad política vive en un estado permanente de acoso por bandas armadas dedicadas a todo tipo de actividades delictivas —donde el secuestro es la principal fuente de ingresos— y por organizaciones guerrilleras —comunistas y musulmanas— con más de veinte años de experiencia, sin contar los grupos paramilitares privados. Esta realidad asfixiante se refleja en la misma calidad de las organizaciones militares y policiales que, atravesadas por la corrupción y la indisciplina, transitan sin mediaciones las fronteras de la legalidad y la ilegalidad.

La industria del secuestro, con una larga tradición en la historia del país, se ha fortalecido en los últimos años. Ya no sólo es afectada la elite económica china —que maneja gran parte de los negocios del país—, sino cualquier individuo atractivo desde el punto de vista económico, inclusive los empresarios extranjeros.<sup>5</sup> Posiblemente el secuestro sea el delito en el que el delincuente deba contar en mayor medida con la aquiescencia de la autoridad pública. En el caso filipino, las “afinidades” entre secuestradores y autoridades militares y policiales es manifiesta. Muchos oficiales y policías se han hecho adictos a tales prácticas.

Filipinas heredó de su lucha contra la ocupación japonesa un conjunto de organizaciones militares de ideología comunista y raigambre campesina que se transformó, bajo la nueva vida independiente del país, en un duro actor político

<sup>4</sup> En 1996 un conjunto multifacético de organizaciones populares establecieron las bases para la conformación de una nueva entidad política, Akbayan (Partido de la Acción Ciudadana). La nueva agrupación enfatiza el trabajo político a nivel local y la participación efectiva, en las elecciones con candidatos propios. Las organizaciones populares rompen así el tradicional temor a involucrarse en actividades electorales. Joel Rocamora, *Formal Democracy and its alternatives in the Philippines: parties, elections and social movements*, agosto 2000. En [www.tni.org](http://www.tni.org)

<sup>5</sup> Recientes congresos y ferias internacionales han sido suspendidos por el temor de empresarios de Taiwan y Singapur a ser secuestrados. La psicosis de la clase empresarial va en aumento.

contestado. La rebelión campesina Huks, desarrollada entre finales de los años cuarenta y comienzos de los años cincuenta, requirió de todo el esfuerzo del Estado, junto a una importante ayuda estadounidense, para enfrentar el “peligro comunista” que pudo ser conjurado. Quizás en la derrota de la rebelión se perdió la última oportunidad para realizar una reforma agraria seria. No obstante, la lucha guerrillera de tono maoísta continuó de forma soterrada y resurgió en las décadas de 1960 y 1970, formando un ejército de más de 40 mil hombres y desafiando al poder central en todo el país, incluida Manila. Si bien después de muchos errores políticos y disensiones internas, el Nuevo Ejército del Pueblo se ha debilitado sensiblemente, sigue siendo un actor corrosivo para el Estado.

La presidenta Aquino fue la primera que inició negociaciones más o menos serias con los comunistas, pero desde el inicio se vieron las limitaciones del poder presidencial. No sólo las Fuerzas Armadas boicotearon las negociaciones con ataques a los campamentos rebeldes, también el *establishment* económico y los grupos paramilitares del interior del país se opusieron con mayor o menor virulencia. Desde entonces, la historia se repite: las iniciativas de negociación emanadas desde Manila se disuelven en un mar de indecisión, mala fe y sabotajes velados por parte de los enemigos del proceso de conciliación.

El Estado filipino también ha tenido que enfrentar un segundo grupo guerrillero de origen musulmán. Éste ha operado durante más de 20 años en Mindanao y el resto de las islas del suroeste. Los musulmanes —que constituyen el 5% de la población total— son mayoría en varias provincias de Mindanao y en algunas islas del archipiélago Sulu. Desde la conquista española en el siglo XVI, esta zona ha mostrado una marcada resistencia a cualquier tipo de asimilación. La política del poder central aposentado en Manila transitó a lo largo de los siglos desde la indiferencia y el conflicto hasta algún tipo de pacto de no agresión. Pero a partir de la conformación de los Estados y su necesidad de delimitar fronteras y establecer los símbolos del poder, la preservación de la identidad musulmana se volvió un conflicto más candente y políticamente más significativo. Los estadounidenses, después de arrebatarse el país a los españoles en 1898, emprendieron una fuerte política represiva, la cual adquirió niveles tan cruentos que hasta despertó la crítica en muchos medios de comunicación estadounidenses.

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, la isla de Mindanao ha sido el principal escenario del conflicto entre cristianos y musulmanes. Una nueva época comenzó con la independencia de Filipinas después de la II Guerra Mundial. La política de ocupación de tierras musulmanas por parte de campesinos cristianos, impulsada desde Manila, incrementó la tensión en la zona a partir de los años cincuenta y dió el origen a nuevas generaciones de militantes y combatientes musulmanes. La década de 1960 vio la aparición de esta nueva generación, más educada y activa, que operó en sintonía con otro conjunto de movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo. En este momento se conformó el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y la lucha insurgente adquiere todas las características de una cruzada. En parte, las milicias musulmanas fueron una respuesta a las cristianas que operaban en la zona en defensa de los territorios usurpados. El FMLN se constituyó en la columna vertebral de la resistencia a la integración forzada y al despojamiento de tierras

*Las  
iniciativas de  
negociación  
emanadas  
desde Manila  
se disuelven  
en un mar de  
indecisión,  
mala fe y  
sabotajes  
velados por  
parte de los  
enemigos del  
proceso de  
conciliación*

A pesar de las políticas represivas, el Gobierno de Manila no descartó nunca el camino de la negociación, de buena o de mala fe, en parte porque desde el lado musulmán había varios sectores, principalmente los más tradicionalistas y acomodaticios, que estaban dispuestos a un acuerdo. Hasta el presidente Ferdinando Marcos, y a pesar del tono fuertemente represivo de su régimen, realizó acuerdos con estos grupos que con el tiempo demostraron ser únicamente papel pintado. Los sucesores de Marcos, Corazón Aquino y Fidel Ramos, ambos con mejores intenciones que el dictador, se sentaron a la mesa de negociaciones. Después de muchos devaneos, en 1996 se logró establecer un esquema de autonomía en algunas provincias de Mindanao que pasaron a estar a cargo del líder del FMLN Nur Misauri.

Los distintos sectores del poder plantean posturas diferentes respecto a la ecuación “negociación-represión” frente a las poblaciones musulmanas del sur. Al interior de los grupos musulmanes también hay fuertes disputas, no sólo por las definiciones tácticas y estratégicas, sino por meras cuestiones de liderazgo personal. El estilo y las tácticas de negociación de Misauri despertaron el recelo de varios grupos y a principios de los años noventa un grupo del FMLN se escindió para formar el Frente Moro de Liberación Islámico (FMLI). Esta denominación marcaba un significativo cambio: en la década de 1960, Liberación Nacional; en la década de 1990, Liberación Islámica. La nueva ola de internacionalismo islamista también llegaba a las islas del sur de Filipinas.

El FMLI ha encabezado posturas más radicales. La experiencia autonomista de Misauri ha sido pobre en resultados y provocado mucha frustración, lo que ha envalentonado a aquellos que creen que la única solución es la independencia.<sup>6</sup> En los últimos años el impulso independentista adquiere nuevos bríos. El aumento de la pobreza y exclusión de la población musulmana incrementa el deseo independentista. Las posiciones más extremas reclaman alrededor del 40% del territorio nacional, con su principal baluarte en la isla de Mindanao, algo irrealizable dada la correlación de fuerzas. La existencia de un tercer grupo insurgente islámico, el de *Abu Sayyaf*, que opera en Filipinas desde inicios de los años noventa, aumenta dramáticamente al conflicto —dado el carácter espectacular de sus secuestros y el tono cruento de muchas de sus operaciones— y dificulta las negociaciones por una mayor autonomía.

## EEUU y un nuevo frente contrainsurgente

EEUU, bajo la suposición de que *Abu Sayyaf* mantiene conexiones con la red *Al Qaeda*, han encontrado en el sur de Filipinas un nuevo frente de combate contra el islam insurgente. La presencia estadounidense al sur de Mindanao y de la isla Basilan —centro de operaciones de *Abu Sayyaf*— para el ejercicio de prácticas

---

<sup>6</sup> Misauri abandonó el poder y encabezó un intento de rebelión en Mindanao frustrado por las autoridades. Actualmente se encuentra detenido por cargos de sedición. Un nuevo liderazgo, apoyado por Manila, se encuentra al frente de la Zona Autónoma Musulmana.

conjuntas con fuerzas filipinas (denominadas *Balikatan 01.-2*) han originado varias disputas.<sup>7</sup> Las fotos de varios rangers vestidos de civil portando armas largas, mientras uno de sus compañeros realizaba operaciones bancarias, ha despertado la indignación popular. En el ejército, dos oficiales de alta graduación han sido desplazados solapadamente por no aceptar las condiciones de operación que suponía la presencia de soldados estadounidenses en la zona. Según el documento final que guía las operaciones de las tropas extranjeras, éstas operan bajo su propio comando pero en última instancia se encuentran bajo la orden de la autoridad filipina. Esto originó la polémica en EEUU debido a que la Constitución prohíbe que fuerzas nacionales se encuentren bajo control de otro país. No obstante, los observadores comprenden que las tropas estadounidenses, en caso de verse atacadas por el enemigo, operarán bajo su propio comando y según sus propios criterios independientemente de cualquier nivel de comando filipino, regional o nacional.<sup>8</sup>

¿El perfil operativo de *Abu Sayyaf* justifica este esfuerzo estadounidense? Los analistas especulan sobre el grado de peligrosidad de la organización. No hay acuerdo sobre el número de voluntarios, no obstante es un grupo reducido que no supera los 3000 miembros.<sup>9</sup> En cuanto a su estrategia política, algunos analistas suponen que sus declaraciones oficiales sólo ocultan un mero deseo de lucro, satisfecho con la política sistemática de secuestros. Esta parece una opinión más bien reduccionista, o muy apegada a la visión oficial de Manila.

La presencia estadounidense parece demostrar que no estamos frente a un mero grupo de oportunistas que suman sus acciones a una de las industrias nacionales de Filipinas: el secuestro. En principio, la posible vinculación de *Abu Sayyaf* con *Al Qaeda* parece verosímil y cierta debido al origen de muchos de sus miembros, especialmente su fundador. Dado que Filipinas es el único país de la región que está en condiciones políticas de aceptar tropas estadounidenses en su territorio, era impensable que Washington desaprovechara la oportunidad. En la región de marras, conviven Malasia e Indonesia, dos países que guardan grupos insurgentes en su territorio y de los cuales no se descarta la cooperación. Es posible que esta sea la principal preocupación de Washington y que su presencia en la región, además del perfil de combate contrainsurgente, también contemple tareas de inteligencia a medio plazo.

---

<sup>7</sup> La oposición argumentó que la Constitución prohíbe la presencia de tropas extranjeras, pero la presidenta Arroyo justificó su posición considerando que la ley dictada hace dos años (*Visiting Forces Agreement*) legaliza la actuación de los *rangers*.

<sup>8</sup> Se supone que la presencia de los *rangers* responde a la práctica de ejercicios conjuntos de entrenamiento. No obstante, el Jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Richard Myers, dijo en una audiencia del Congreso que “era absolutamente posible que las tropas estadounidenses pudieran sufrir bajas durante los ejercicios, especialmente en combates con *Abu Sayyaf*”. En “Manila plans to ban US forces from combat role”, *Financial Times*, 8 de febrero de 2002.

<sup>9</sup> Algunos grupos del FMLN que respondían a Nur Misuari se han aliado a *Abu Sayyaf*.

Manila espera que la contribución estadounidense —que no supera los 600 hombres— mejore la *performance* de su ejército de tierra.<sup>10</sup> En momentos decisivos no parecieron estar a la altura de las necesidades y los últimos años han estado jalonados de fracasos. Algunos analistas especulan hasta de connivencia entre algunos miembros del ejército y el grupo de *Abu Sayyaf*, lo que no sería de extrañar dada la tradición del arma y la gran cantidad de dinero que empieza a circular por las islas del sur fruto de la industria del secuestro.

Filipinas guarda en su territorio una de las tantas fronteras del mundo islámico con el mundo cristiano u occidental. En estos momentos tal situación no puede más que ser fuente de preocupación y de análisis de los observadores internacionales. Si bien *Abu Sayyaf* supone cierto nivel de peligro, al igual que los otros grupos insurgentes, los problemas reales de Filipinas residen en una estructura social altamente desigual y en un crecimiento económico que, más allá de algunos indicadores del buen gusto ortodoxo, no logra más que generar mayor pobreza y crisis medioambientales más agudas e irreversibles. Ni la presencia estadounidense ni las buenas notas de los organismos internacionales lograrán solucionar estos problemas. Sólo un proyecto político que incluya a la mayoría de la población a través de una autoridad política sólida y legítima, podrá vislumbrar algunas de las soluciones que la sociedad filipina tanto necesita.

### **Derechos colectivos indígenas: una barrera contra la depredación**

La nefasta retroalimentación entre pobreza y degradación medioambiental se expresa de forma dramática en la cuestión indígena. Con casi el 20% de la población, las diversas comunidades etno-lingüísticas que pueblan Filipinas han sido sometidas a un conjunto de políticas violentas que las han obligado a ser testigos de la destrucción de sus territorios ancestrales y, en muchos casos, a la emigración forzada. Las comunidades indígenas, principalmente situadas en las tierras altas, las más ricas en activos naturales y por tanto las más afectadas por el estilo de crecimiento imperante altamente depredador, junto a un grupo sustancial de ONG y grupos de activistas medioambientales han confrontado con el poder central y las empresas para preservar el habitat donde han desarrollado sus estilos de vida desde tiempo inmemorial.

El resultado de las batallas legales y de los conflictos abiertos, muchos

<sup>10</sup> El Gobierno de Bush ha pedido 77 millones de dólares de ayuda militar para Filipinas, un aumento sustancial respecto a los 22 millones del año pasado. La firma de un acuerdo de ayuda logística mutua (Mutual Logistics Support Agreement) es el paraguas para la transferencia de equipos. Además, permite hacer usar moderadamente la antigua Base Clark que, junto a la Base Naval de Subic, debió ser abandonada por los estadounidenses en 1992 cuando el Senado no renovó el acuerdo, firmado en 1947, para su permanencia.

de ellos violentos, es desesperanzador. La degradación medioambiental continúa y la preservación de los saberes ancestrales y de la vida cotidiana de las comunidades se debilitan. No obstante, en los últimos años, ciertos acontecimientos y actitudes políticas derivadas desde el poder central parecen vislumbrar algún tipo de esperanza.

En 1997 se promulgó la Ley sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y desde entonces se abrieron nuevos caminos para la lucha de las comunidades aborígenes. El principal instrumento derivado de esta pieza legislativa son los Certificados de Dominio Ancestral, por el cual se reconocen los derechos colectivos de las comunidades sobre un territorio previamente especificado. Hasta ahora, el Gobierno ha reconocido más de 100 reclamos a través de la Comisión Nacional del Pueblo Indígena, un cuerpo creado por la Ley Indígena y compuesto por miembros del Gobierno y de las comunidades.

La resistencia al otorgamiento de estos Certificados de Dominio Ancestral ha sido muy marcada. Durante el Gobierno de Estrada hubo una denuncia hecha por particulares frente a la Corte Suprema de Justicia aduciendo la inconstitucionalidad de la mencionada Ley. Según los denunciantes, ésta contradecía la prerrogativa del Estado a ejercer el derecho público sobre todo el territorio nacional. Tal denuncia fue una buena excusa para que Estrada suspendiera todo el proceso de ejecución y puesta a punto de los Certificados de Dominio Ancestral.

Con el Ejecutivo de Arroyo (enero 2001) la situación ha cambiado. La Corte Suprema saldó el contencioso a favor de la Ley Indígena y el nuevo Gobierno parece dispuesto a seguir adelante con sus lineamientos. No obstante, las empresas y muchos municipios afectados por los nuevos derechos están oponiéndose, vía legal y de facto, al ejercicio de los derechos indígenas. En el caso de las empresas mineras, la principal fuente de derechos deriva de la Ley de Minería promulgada varios años antes que la Ley Indígena. Estas dos leyes son los dos baluartes legales en los que se apoyan las principales partes en conflicto. Éste se verá agravado debido a que los pueblos indígenas poseedores de los certificados de marras tendrán derecho a dar un previo consentimiento a cualquier tipo de explotación sobre sus tierras, y porque algunas comunidades indígenas han comenzado a ejercer su derecho a la recolección de impuestos y cobro de servicios turísticos en sus territorios, desplazando a la autoridad política tradicional.

El gran desafío de las comunidades indígenas es la administración de los recursos bajo su cuidado. Si bien son poseedoras de saberes ancestrales que contribuirán al buen manejo de los ecosistemas, es necesario un conjunto de técnicas y conocimientos modernos, no sólo para realizar una explotación sustentable y económicamente beneficiosa, sino también para contrarrestar las argucias y artimañas de los enemigos de este nuevo sistema de reconocimiento de derechos colectivos. En este sentido, el trabajo de las ONG está siendo decisivo.

C.D.